

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO No.

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

PROCESO:	Ejecutivo
EXPEDIENTE:	76001-33-33-021-2019-00321-01.
EJECUTANTE:	Fabio Hernán Soto Canizales <a href="mailto:daviso@hotmail.com">daviso@hotmail.com</a>
EJECUTADO:	Municipio de Santiago de Cali
ASUNTO:	Confirma auto que se abstuvo de librar mandamiento de pago, pero por las razones expuestas en esta providencia.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resolverá el recurso de apelación propuesto por la parte ejecutante, contra el auto interlocutorio No. 16 de enero 21 de 2020, proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que se abstuvo de librar mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

El señor Fabio Hernán Soto Canizales, a través de apoderado, instauró proceso ejecutivo contra el Municipio de Cali y pidió librar mandamiento de pago a su favor, por los siguientes valores: 1) Ciento once millones setenta y cuatro mil quinientos treinta y dos pesos (\$111.074.532), presentado para ello el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública No. 4133.0.26.1.1023-2017, suscrita en junio 5 de 2019 y 2) Doscientos veintidós millones novecientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y ocho (\$222.993.648), representados en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública No. 4133.0.26.1.1024-2017, suscrita en agosto 8 de 2019. Pidió también el pago de intereses moratorios y de las costas respectivas.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 16 de enero 21 de 2020<sup>1</sup> el Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo del Circuito de Cali, negó el mandamiento de pago.

Consideró que para constituir el título ejecutivo el actor allegó las actas de liquidación de los contratos de obra pública Nos. 4133.0.26.1.1023-2017 y 4133.0.26.1.1024-2017, de acuerdo con el recuento normativo y jurisprudencial aplicable y que citó en su providencia,

<sup>1</sup> Ver folios 22 a 24.



concluyó que las actas de liquidación no son un título ejecutivo autónomo, pues provienen de un contrato estatal del cual no pueden ser desligadas.

Aunado a ello, no resultaba viable considerar que el saldo establecido en una liquidación bilateral sea título ejecutivo si el mismo no guarda concordancia con las estipulaciones del contrato.

Así las cosas, concluyó que al no agregarse al expediente los contratos objeto de liquidación, no es posible establecer que los saldos a favor consignados en el segundo acápite de las actas de finiquito “*Valores y Estado Financiero*”, correspondan con lo pactado en los contratos de obra pública 4133.0.26.1.1023.-2017 y 4133.0.26.1.1024-2017, lo que conduce a afirmar que en el presente asunto no se encuentran los elementos integrantes del título ejecutivo complejo que reflejen una obligación clara, expresa y exigible.

#### **IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

Sostiene el apelante<sup>2</sup> en síntesis que, luego del recuento jurisprudencial que fue analizado, es evidente que la providencia cuestionada debe ser revocada, por cuanto desconoce el criterio adoptado por las subsecciones, secciones y además por la Sala Plena del Consejo de Estado, en tanto que concluye que el acta de liquidación bilateral y de mutuo acuerdo de un contrato estatal sí es un título ejecutivo autónomo, no siendo necesaria la aportación del contrato estatal, pues del título aportado al presente asunto se extrae de manera evidente la prueba del crédito que existe a favor del ejecutante (actas 1023 y 1024), luego del balance final de cuentas, además cualquier reparo que el ejecutado tenga sobre el mismo, válidamente puede ejercer su derecho a la defensa mediante la proposición de los recurso de ley o la proposición de excepciones previas o de mérito, garantizándosele el debido proceso y no coartando el debido proceso y acceso a la administración de justicia del ejecutante.

#### **V. CONSIDERACIONES:**

El asunto que se discute se contrae a establecer si el juez se encuentra facultado para negar el mandamiento de pago, bajo el argumento que el título que se pretende ejecutar es complejo y al no aportarse los respectivos contratos, las meras actas de liquidación aportadas no contienen una obligación clara, expresa y exigible.

##### **5.1. TESIS**

La providencia recurrida será confirmada, teniendo en cuenta la literalidad del título ejecutivo y la constitución de este como un título ejecutivo complejo, en la medida en que no se logra establecer el valor que la entidad se obliga pagar al contratista, y la necesidad de allegar tanto los contratos suscritos como los anexos que hacen parte integral de las

---

<sup>2</sup> Ver folios 26 a 37.



respectivas actas.

## 5.2. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso (CGP) y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, en cuanto a los principios de especialidad y subsidiariedad, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA<sup>3</sup> establece que son títulos ejecutivos:

(i) las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; (ii) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; (iii) el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iv) las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP<sup>4</sup> preceptúa que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en:

(i) un documento que provenga del deudor o de su causante; (ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; (iii) las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y (iv) los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Con respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que:

<sup>3</sup> **Artículo 297. Título Ejecutivo.** Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

<sup>4</sup> **Artículo 422. Título ejecutivo.** Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.



*“Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal”.*

También dispone el artículo 430 del CGP que:

*“Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso.*

*En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución, según sea el caso.”*

El Consejo de Estado sostuvo que los títulos ejecutivos deben cumplir con ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales:

*i)* Las formales, se refieren a las que den fe de que los documentos que lo conforman sean auténticos y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de una providencia judicial que preste mérito ejecutivo. *ii)* Las sustanciales, hacen alusión a que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles. Igualmente ha señalado que un título ejecutivo puede ser singular, cuando está constituido en un solo documento, o complejo, cuando esté integrado por un conjunto de documentos<sup>5</sup>.

Dicha Corporación, también señaló que una obligación es clara, cuando no surge duda del contenido y características de la misma; expresa, cuando consigna taxativamente la existencia del compromiso, y exigible, cuando para pedir el cumplimiento no es necesario agotar plazos o condiciones, o los mismos ya se han agotado<sup>6</sup>.

Adicionalmente, la misma colegiatura respecto a las actas de liquidación del contrato en reciente jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

*“(…) La liquidación bilateral del contrato estatal es un negocio jurídico que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, deben celebrar las partes una vez terminado el mismo con el objeto de finiquitar el vínculo que los unía, estableciendo para el efecto si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, definiendo las cuentas del contrato y acordando los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En esa medida, es perfectamente posible que el acta de liquidación bilateral del contrato estatal constituya, junto con otros documentos, título ejecutivo complejo por contener un acuerdo de voluntades del cual surge una obligación clara, expresa y exigible que, en los términos del artículo 488 del CPC, puede ser objeto de cobro ejecutivo. (…)”<sup>7</sup>*

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 31 de enero de 2008, CP: Dra. Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 44401-23-31-000-2007-00067-01 (34201).

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 14 de mayo de 2014, CP: Dr. Enrique Gil Botero, radicación 25000-23-26-000-1999-02657-02 (33.586).

<sup>7</sup> C. de E. Sección Tercera. Subsección B. CP: Martín Bermúdez Muñoz. Providencia de marzo 9 de 2020. Radicación: 85001-23-31-000-2009-00139-01(44458). Actor: Unión Temporal Casanare Hábitat de Paz. Demandado: Departamento de Casanare.



En suma, la finalidad del proceso ejecutivo no es declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya está reconocido y es por tal razón que el análisis de procedencia del mandamiento de pago se ha de limitar a verificar si las obligaciones son claras expresas y exigibles.

### **5.3. CASO CONCRETO:**

De conformidad con el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, la Sala procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

El juez de primera instancia, mediante auto recurrido dispuso negar el mandamiento de pago, por considerar que el título ejecutivo, en este caso las actas de liquidación del contrato no son un título autónomo, pues a su criterio provienen de un contrato estatal del cual no pueden ser desligadas; aunando a ello, añadió que no resultaba viable considerar que el saldo establecido en una liquidación bilateral fuera título ejecutivo si el mismo no guarda concordancia con las estipulaciones del contrato.

Así las cosas, concluyó que al no agregarse al expediente los contratos objeto de liquidación, no es posible establecer que los saldos a favor consignados en el segundo acápite de las actas denominado “*Valores y Estado Financiero*”, correspondan con lo pactado en los contratos de obra pública 4133.0.26.1.1023.-2017 y 4133.0.26.1.1024-2017, por lo que en el presente asunto no se encuentran los elementos integrantes del título ejecutivo complejo que reflejen una obligación clara, expresa y exigible.

Por su parte, el apoderado del ejecutante, en suma, señaló que la decisión del *a quo* desconoce el precedente jurisprudencial al desconocer que el acta de liquidación bilateral y de mutuo acuerdo de un contrato estatal es un título ejecutivo autónomo, no siendo necesario aportar el contrato estatal, pues del título aportado se extrae de manera evidente la prueba del crédito que existe a favor del ejecutante, luego del balance de cuentas, además cualquier reparo que el ejecutado tenga sobre el mismo, válidamente puede hacerlo ejerciendo su derecho a la defensa mediante la proposición de los recurso de Ley o la proposición de excepciones previas o de mérito.

Al respecto debe indicarse que el artículo 297 del CPACA dispone en su numeral 3 que:

*“...prestarán mérito ejecutivo los contratos, (...) el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones (...).”*

Cabe resaltar además que los títulos ejecutivos, al margen de si son simples o complejos, deben gozar de, entre otras, unas condiciones sustanciales<sup>8</sup>, último requisito que se

---

<sup>8</sup> Sentencia del 6 de mayo de 2019, proferida por esta subsección en el expediente 49142.



traduce en que las obligaciones a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado deben ser claras, expresas y exigibles<sup>9</sup>.

Ahora, una obligación es expresa cuando aparece manifiestamente en la redacción del título, lo que quiere decir que se encuentra nítidamente declarada en el documento que la contiene.

Es clara cuando se entiende en un solo sentido y es fácilmente inteligible, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero, estas deben ser líquidas o liquidables por simple operación aritmética. Es exigible cuando se puede demandar su cumplimiento al no estar pendiente el vencimiento de un plazo o la realización de una condición.

En el presente caso para efectos de constituir el título ejecutivo, el ejecutante aportó copia de las siguientes actas de liquidación:

- **Acta de Liquidación No. 4133.0.26.1.1023-2017 de junio 5 de 2019**, de la cual se destaca lo siguiente:

“...2. *Valores y Estado Financiero*

Descripción		Valor
1.	Valor inicial	\$369.883.979,00
2.	Valor de las adiciones	\$00
3.	Valor total contratado	\$369.883.979,00
4.	Valor final del contrato, incluidas las adiciones en S.M.L.M.V., de la fecha de la terminación del contrato.	501,390071
VALOR ACTAS PARCIALES		\$205.592.177,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		\$111.074.532,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$111.074.532,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$53.217.270,00
DIFERENCIA VR. CONTRATO – VR EJECUTADO		453.217.270,00

(...)

6. *Verificación obligaciones sistema de seguridad social y recursos parafiscales.*

*El supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, previa verificación de la planilla de aportes correspondiente.*

(...)

8. *Causas de Terminación*

*Causa. Terminación del contrato de obra nro. 4133.0.26.1.1023 de 2017.*

*Observaciones: De acuerdo al informe presentado por el interventor de la obra en el (folio 1471 y 1479-1480), se entregó el 86.6124425%, que equivale a \$316.666.709 de las obras contratada, las cuales recibieron a entera satisfacción por parte del interventor.*

<sup>9</sup> Código General del Proceso. **Artículo 422.** “Pueden demandarse expresamente la obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan pena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. “





Y el \$14.3875575% faltante equivale a \$53.217.270, fue el “Separador de la calle 34 entre carreras 1ª y 7”, el cual NO se ejecutó debido a que era necesario por estar ubicada en una vía de alto tráfico tener el permiso ante la Secretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, dicho permiso requería de tiempo para su respuesta y tenía además un costo, el cual no fue tenido en cuenta en el presupuesto de dicha obra, por lo tanto el contratista decide no ejecutar esta obra para evitar incumplimiento al contrato, de acuerdo a lo anterior MIGUEL ANTONIO NIÑO CAMACHO- interventor, presenta un informe (folio 1350-1351 y del 1385 al 1480).

En el acta de reunión fechada el 21 de diciembre de 2017 (folio 1130) se determina que “la obra del separador vial no se efectuara y se harán los trámites pertinentes para solicitar en el mes de enero de 2018, la devolución de los recursos a la comuna 4”.

En el Decreto nro. 4112.010.20.0381 de junio 29 de 2018 se evidencia que se hizo la devolución del recurso de la obra que no se ejecuto a la comuna 4.

Con su suscripción quedan extinguidas las obligaciones surgidas entre MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMNBIENTE DAGMA Y FABIO HERNÁN SOTO CANIZALES, por concepto del contrato nro. 4133.0.26.1.1023.2018 del 20 de septiembre de 2017.

ANEXOS.

FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ANEXOS:

- a) Copia del recibo a satisfacción expedido por el interventor del contrato (1350-1351)
- b) Copia del documento que contiene el balance económico del contrato (folio 1607)
- c) Copia de la orden de pago mediante la cual se hicieron efectivos los pagos de Contratista Acta nro. 1 (folios 935-953) Acta nro. 2 (folios 1135-1158)
- d) Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del Contratista (folios 953-955, 1174-1176)
- e) Informe final por el CONTRATISTA (folio 1385-1480 y anexos desde 1481 al 1574)
- f)Otros, informe sobre la no ejecución del separador de la calle 34 y saldo a favor del municipio (folio 1130-1132, 1189, 1479-1480, 1611-1624).

Las partes manifestaron que aceptan la liquidación del contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo pro todo concepto...”

- **Acta de Liquidación No. 4133.0.26.1.1024-2017 de agosto 8 de 2019**, de la cual se destaca lo siguiente:

“...2. Valores y Estado Financiero

Descripción		Valor
1.	Valor inicial	\$663.266.435,00
2.	Valor de las adiciones	\$00
3.	Valor total contratado	\$663.266.435,00
4.	Valor final del contrato, incluidas las adiciones en S.M.L.M.V., de la fecha de la terminación del contrato.	899,08
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$439.647.729,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$222.993.648,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$625.059,00



DIFERENCIA VR. CONTRATO – VR EJECUTADO	\$625.059,00
----------------------------------------	--------------

(...)  
6. Verificación obligaciones sistema de seguridad social y recursos parafiscales.

El supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, previa verificación de la planilla de aportes correspondiente.

(...)  
8. Causas de Terminación

Causa. Terminación del contrato de obra nro. 4133.0.26.1.1024 de 2017.  
Observaciones. De conformidad con lo pactado en la cláusula vigésima séptima, la liquidación se surte de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por lo tanto, el última acta administrativo que se surtió fue la resolución nro. 4133.010.21.1310-2018 del 18 de diciembre de 2018, por medio de la cual se da por terminado el proceso administrativo sancionatorio de posible incumplimiento del contrato nro. 4033.0.26.1.1024 de 2017, determinando que el contratista cumplió con sus obligaciones.

Las obras fueron recibidas conforme a las condiciones establecidas en cuanto a diseños, planos, especificaciones técnicas, calidad y cantidad a entera satisfacción, verificado por la interventoría del proyecto. Conforme consta en el informe final de interventoría, suscrito por Miguel A. Niño Camacho en su condición de interventor y Fabio Hernán Soto Canizales en su condición de contratista, las obras objeto del contrato se recibieron a satisfacción.

Con su suscripción quedan extinguidas las obligaciones surgidas entre MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMNBIENTE DAGMA Y FABIO HERNÁN SOTO CANIZALES, por concepto del contrato nro. 4133.0.26.1.1023.2018 del 20 de septiembre de 2017.

ANEXOS.

FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ANEXOS:

- a) Copia del recibo a satisfacción expedido por el interventor del contrato (1373-1375)
- b) Copia del documento que contiene el balance económico del contrato (folio 1363)
- c) Copia de la orden de pago mediante la cual se hicieron efectivos los pagos de Contratista Acta nro. 1 (folios 806-836) Acta nro. 2 (845-884)
- d) Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del Contratista (folios 953-955, 1174-1176)
- e) Informe final por el CONTRATISTA (folio 1385-1480 y anexos desde 1481 al 1574)
- f) Otros, informe sobre la no ejecución del separador de la calle 34 y saldo a favor del municipio (folio 1130-1132, 1189, 1479-1480, 1611-1624).

Las partes manifestaron que aceptan la liquidación del contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto...”

De las actas de liquidación aportadas, se advierte que tal como lo dedujo el a quo la simple inclusión del mencionado cuadro “Valores y Estados Financiero” no tiene la





virtualidad de configurar un reconocimiento expreso por parte de la entidad que se pretende ejecutar.

En dicho cuadro la entidad ejecutada no hizo una manifestación expresa e inequívoca de obligarse a pagar las sumas reclamadas por el ejecutante, y es tanto así que de la parte final de cada acta de liquidación parece entenderse que con la suscripción del acta quedarían extinguidas todas las obligaciones entre las partes:

*“Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.”*

Redacción que afecta el componente de claridad, esencial en la definición del título ejecutivo conforme a la ley y a la jurisprudencia antes citadas.

Por lo tanto, entonces, la liquidación bilateral del contrato estatal es un negocio jurídico que, deben celebrar las partes una vez terminado el mismo con el objeto de finalizar el vínculo que los unía, estableciendo para el efecto de forma clara si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, definiendo las cuentas del contrato y acordando los ajustes, revisiones y reconocimientos a que hubiera lugar.

Adicional a lo anterior, respecto a la configuración compleja del título ejecutivo puede decirse que además de la necesidad de aportar los respectivos contratos también se haría necesario aportar los documentos que se enuncian en las actas como parte integral de la liquidación y que se encuentran descritos como “Anexos”, en cada documento.

De esto, se entiende que es perfectamente posible que las actas de liquidación bilaterales constituyan, junto con otros documentos, título ejecutivo complejo por contener un acuerdo de voluntades, del cual puede evidentemente surgir una obligación clara expresa y exigible, con el fin de ser objeto de un cobro coactivo.

De otra parte, y de conformidad con lo argumentado por el apelante entiéndase de lo expuesto, que no se encuentra en discusión lo indicado por el Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias donde ha manifestado que las actas de liquidación bilateral del contrato por sí solas pueden ser títulos ejecutivos, sin embargo, ello ocurre en ocasiones muy particulares cuando se trata de contratos de contenido y cláusulas muy conocidas y obvias, como sucede en un contrato de adhesión y cada caso debe ser analizado de manera particular, pues desde luego para que esto sea así la obligación debe ser clara, expresa y exigible, requisitos que justamente fueron los que no se encontraron cumplidos en este asunto, particularmente en lo concerniente a la claridad de la suma reclamada, lo cual no puede ser interpretado por las partes ni por el juez debido a la literalidad del título ejecutivo.

Así las cosas, este juzgador dispondrá confirmará la decisión de negar el mandamiento de pago tomada por el *a quo*, mediante auto nro. 16 del 21 de enero de 2020.

En consecuencia, la Sala

### RESUELVE:

**PRIMERO. CONFIRMAR** el auto interlocutorio nro. 16 del 21 de enero de 2020, proferido por el Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que dispuso negar el mandamiento de pago solicitado por la demandante Fabio Hernán Soto Canizales contra el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO. DEVUÉLVASE** el expediente híbrido al juzgado de origen, cancélense su radicación y sin costas en esta instancia.

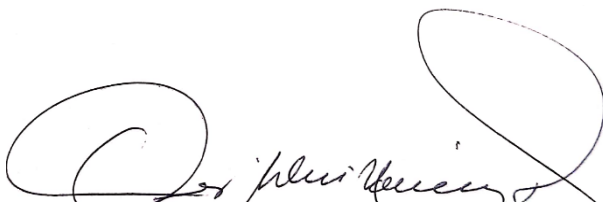
Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No.\_\_\_\_\_).

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**

**Los Magistrados,**

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. Acta No. \_\_\_\_

**Los magistrados,**



**OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**



**OMAR EDGAR BORJA SOTO**



**EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

*Elaborado, Yurani López  
Vo.Bo. Secretario  
Complementado en el despacho del ponente.*